

Unlocking Peru's untapped talent by turning education into social mobility

Category: Peru

written by oecdecoscope | February 2, 2026



Peru's young population is full of potential, but too much of it remains underused. Intergenerational mobility has improved in education but remains weak in incomes. This disconnect explains why a young and increasingly educated population has not translated into stronger productivity growth or broader economic opportunity.

Un sector público más digital para una América Latina más productiva

Category: Brazil, chile, Colombia, Costa Rica, Digitalisation, Digitalisation, Latin America, Mexico, Peru, Posts in Spanish

written by oecdecoscope | February 2, 2026



Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodríguez-Vargas, Departamento de Economía, OCDE

La última edición de las *Perspectivas Económicas de la OCDE* ofrece un diagnóstico realista pero esperanzador sobre las economías latinoamericanas. Aunque el entorno global sigue siendo complejo, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, la región tiene oportunidades claras para fortalecer el crecimiento económico a través de las reformas estructurales. Una de las más prometedoras: la transformación digital del sector público para simplificar trámites, reducir costos y mejorar la eficiencia regulatoria.

América Latina muestra resiliencia pero con desafíos persistentes

En línea con la evolución de la economía global, tras un crecimiento proyectado del 2.3% en 2025, se prevé una ligera desaceleración al 1.9% en 2026, antes de repuntar al 2.4% en 2027 en las siete principales economías de la región. Factores como la consolidación fiscal en muchos países de la región, necesaria pero restrictiva, y una elevada incertidumbre política y económica seguirán afectando la demanda interna, la inversión y las exportaciones, principalmente en 2026.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de

América Latina

	2025	2026	2027		2025	2026	2027
PIB variación, %				Inflación general, %			
 Argentina	4.2	3.0	3.9	 Argentina	41.7	17.6	10.0
 Brasil	2.4	1.7	2.2	 Brasil	5.1	4.2	3.8
 Chile	2.4	2.2	2.2	 Chile	4.4	3.4	3.0
 Colombia	2.8	2.8	2.9	 Colombia	5.1	4.6	3.8
 Costa Rica	4.2	3.5	3.4	 Costa Rica	-0.1	0.8	2.1
 México	0.7	1.2	1.7	 México	3.8	3.3	2.9
 Perú	3.1	2.8	2.7	 Perú	1.5	1.7	2.0
América Latina-7	2.3	1.9	2.4	América Latina-6 (sin Argentina)	3.3	3.0	2.9
OCDE	1.7	1.7	1.8	OCDE	4.0	3.4	2.6
Mundo	3.2	2.9	3.1				

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.

Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 118, diciembre de 2025.

La inflación en los últimos meses ha sido más persistente de lo esperado. En la mayoría de los países se prevé que en 2025 la inflación se mantenga por encima de las metas de los bancos centrales, convergiendo gradualmente hacia las metas en 2026 y 2027. Excepciones son Perú, donde la inflación está controlada hace un año, Costa Rica, que mantiene una inflación negativa en 2025, y Argentina, en donde la elevada inflación seguirá reduciéndose gracias a una combinación de consolidación fiscal y política monetaria restrictiva. La mayoría de los países tendría que mantener una política monetaria prudente basada en datos y orientada a devolver la inflación a sus metas sin generar presiones innecesarias sobre la actividad. En este contexto, los bancos centrales deben mantenerse atentos a la evolución del comercio global, las condiciones financieras,

las expectativas de inflación y la orientación de la política fiscal. Al mismo tiempo, será clave que la consolidación fiscal siga avanzando con medidas concretas y más ambiciosas, dada la elevada deuda pública y la necesidad de asegurar su sustentabilidad en un entorno externo incierto y con elevados costos de financiamiento.

Los riesgos económicos están sesgados a la baja:

- **Incertidumbre global derivada de tensiones comerciales y geopolíticas**, junto con la incertidumbre política en algunos países de la región asociada al ciclo electoral u otros factores internos, podría afectar negativamente a la inversión y las exportaciones, con repercusiones adversas sobre el crecimiento económico.
- **Desviaciones fiscales** podrían subir el coste del servicio de la deuda, socavar la confianza, frenar la inversión y generar presiones inflacionarias.
- **Persistencias inflacionarias** limitarían el espacio para reducir las tasas de interés, afectando las condiciones financieras y desincentivando el consumo y la inversión.

Sin embargo, también hay riesgos al alza: una reducción de las barreras comerciales o redirección del comercio hacia la región y una menor incertidumbre geopolítica podrían fortalecer el consumo, la inversión y el consumo.

Aprovechar la revolución digital para avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes

El capítulo especial de las perspectivas económicas subraya la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes. En este contexto, la transformación digital del

sector público emerge como una herramienta clave para facilitar esta simplificación regulatoria, reduciendo la carga administrativa y modernizando procesos normativos. Una implementación eficiente de la gobernanza digital representa una gran oportunidad para América Latina, tanto para mejorar la eficiencia del gasto público y la transparencia, como mejorar el crecimiento económico al impulsar la productividad de las empresas, históricamente baja. Un gobierno digital bien implementado permite:

- Ofrecer servicios públicos más rápidos, sencillos e inclusivos.
- Reducir costos administrativos y simplificar trámites gubernamentales, mejorando el entorno de negocios, lo que cual se puede traducir en ganancias significativas de eficiencia al reducir costos y tiempos de espera, ampliar la cobertura y fomentar la competitividad de las empresas.
- Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas facilitando el acceso ciudadano a la información, la detección de irregularidades, contribuyendo a prevenir el fraude.

Los indicadores de la OCDE muestran que países como Colombia y Brasil lideran el gobierno digital en la región. Colombia ha avanzado significativamente con la puesta en marcha de plataformas en línea, aplicaciones móviles para trámites gubernamentales y datos abiertos, mientras que Brasil ha sido pionero en servicios como el voto electrónico, las declaraciones de impuestos digitales, y más recientemente la centralización del acceso a cientos de servicios y la identificación digital. No obstante, muchos otros países siguen rezagados (Figure 1).

¿Qué se necesita para una transformación digital exitosa del sector público?

Para lograr una transformación digital exitosa en el sector público, los gobiernos de América Latina aún enfrentan retos importantes y requieren redoblar esfuerzos para lograr:

- **Infraestructura digital robusta** con cobertura suficiente y sistemas interoperables entre niveles de gobierno para garantizar que todos puedan acceder a los servicios digitales.
- **Coordinación efectiva entre gobiernos centrales y locales.** En muchos países de la región, existe una gran brecha en el uso de herramientas digitales entre las instituciones públicas centrales y las locales.
- **Autoridad política clara para liderar la transformación.** El reciente impulso a la agenda digital en México, incluida la creación de la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica, es un ejemplo destacado de cómo dotar de liderazgo institucional a estos procesos
- **Regulación ágil y flexible para tecnologías** emergentes como la inteligencia artificial.
- **Confianza ciudadana.** Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos es esencial para que los ciudadanos confíen y utilicen los servicios públicos digitales, aprovechando así al máximo el potencial de la digitalización. Además, publicar datos en formatos reutilizables facilitaría el acceso a información pública completa y confiable, mientras que impulsar la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, universidades y empresas, aceleraría la experimentación y mejoraría el impacto de la gobernanza digital.

Casos exitosos como el de Estonia demuestran que una

gobernanza digital bien implementada puede generar ahorros al gobierno equivalentes al 2 % del PIB anual.

Digitalizar para transformar

La digitalización del sector público no solo mejora la eficiencia del gasto público. También genera beneficios que se extienden a toda la economía, al elevar la productividad, reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas, facilitar la formalización y mejorar el acceso a servicios esenciales, todos desafíos de larga data en la región. Pero para que la gobernanza digital tenga legitimidad y pueda realmente desplegar todo su potencial, es necesario que todos se conviertan en “ciudadanos digitales”. Esto implica centrarse en las necesidades reales de la población y crear las condiciones para que todos tengan acceso a conexión a internet, dispositivos adecuados y las habilidades necesarias para navegar con seguridad. La transformación digital debe ser ambiciosa. Solo así la región podrá aprovechar todo su potencial y construir un futuro más próspero.

Para más información:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9f653ca1-en> – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

The hidden carbon markets: how forests can balance emissions

Category: agriculture, Brazil, Climate, Colombia, Costa Rica, Finland, Indonesia, New Zealand, Peru
written by oecdecoscope | February 2, 2026



How OECD Economic Surveys reveal the drivers of deforestation, and the policy tools to stop it

By Michael Koelle, OECD Economics Department

Tropical forests cover vast swaths of land in many OECD member and accession countries, including more than 75% of Costa Rica's territory, and over half of Brazil, Colombia, Indonesia and Peru. In these countries, emissions from land use, land use change and forestry (LULUCF), largely driven by forest loss and degradation, account for a large share of total emissions (Figure 1). In fact, land use emissions are in some cases the main driver of national emission trends. But forests can also be part of the solution, as the experiences of Finland and New Zealand, two forest-rich OECD members, teach us.

For many countries, forests are no longer just a conservation issue, they are central to climate mitigation plans. Turning forests into carbon sinks is one of the most cost-effective ways to offset hard-to-abate emissions from agriculture, transport and energy. Finland and New Zealand have long had negative LULUCF emissions thanks to sustainable forest management and afforestation. Costa Rica managed to turn around LULUCF emissions, converting its forests into a carbon sink. Indonesia aims to achieve net negative emissions from LULUCF by 2030 while in Peru and Brazil, LULUCF accounts for 65% and 38% of planned emissions reductions by 2050, respectively. The economic case for protecting forests, through stronger enforcement, property rights, sustainable agriculture, and better incentives, has never been clearer.

Insights from Economic Surveys: What's really driving deforestation?

What do Brazil, Costa Rica, Colombia, Finland, Indonesia, New Zealand, and Peru have in common? They are all forest-rich economies, and each has been subject of in-depth analysis in OECD Economic Surveys. These studies go beyond emissions reporting. They dig into the underlying economic drivers of deforestation and discuss what can be done to turn forests into carbon sinks. While each country has its own context, common drivers of deforestation emerge. Forest loss is rooted in economic structures and incentives, from the rapid expansion of agriculture to unclear or unenforced property rights and misalignment between individual incentives and broader societal goals. Developing forest-based activities that generate sufficient economic value while keeping forests intact is far from impossible, given that cleared forest land is often used for low-profitability activities. Moreover, as seen in Finland and New Zealand, afforestation can be one of the least costly ways to reduce net greenhouse gas emissions. Tackling deforestation therefore requires structural policy

responses that make choosing forests the economically sensible option, not just environmental regulation.

Fostering sustainable agriculture

Across all countries studied the expansion of the agricultural frontier is the main driver of deforestation. In Peru, OECD research shows that 90% of all deforested land is used for agriculture and livestock-rearing (Garcia Soto and Koelle, 2025). Moreover, 75% of these lands are identified as mixed-use, where farmers combine crop growing and livestock grazing on relatively small plots. In Brazil, cattle is a major pressure; in Indonesia, palm oil plantations continue to push into forest areas. Cattle grazing was also a main driver of deforestation in Costa Rica and Colombia. Most of these activities have low productivity and profitability, making extensive use of underpriced land. As Finland's experience shows, managing soil emissions from agriculture and forestry can become a crucial issue even when forest stocks have stabilised.

To address this, OECD Economic Surveys recommend:

- Eliminating environmentally harmful agriculture subsidies, such as cattle ranching subsidies, which contributed to successful reforestation in Costa Rica.
- Improving scientific knowledge of agriculture, soils and forests, which provides the basis for cost-efficient emissions reduction and carbon storage activities in Finland.
- Boosting productivity on existing land, to reduce pressure to expand the agricultural frontier.
- Incentivising agroforestry and sustainable land-use practices and enforcing compliance with the law and regulations tied to land rights.

Strengthening property rights

Most deforestation occurs on land that is either publicly owned or of unclear or unenforced property rights. In Peru, state lands without designated purpose are at the highest risk for deforestation. In Colombia, land rights are often unclear and ambiguous after decades of conflict and displacement of rural populations. In Brazil, a strong framework exists, but enforcement is a challenge. Indigenous communities are especially vulnerable in defending their property rights, even if formally recognised.

OECD Economic Surveys recommend:

- Creating comprehensive land registries using modern technology.
- Strengthening property rights and law enforcement in remote areas, including based on satellite imagery.
- Recognising and enforcing indigenous land rights, which are linked to lower deforestation rates.

Aligning incentives with climate goals

Even with secure land rights and strong enforcement, forest conservation must make economic sense. Intact forests need to generate real value for communities and landowners. Payment for ecosystem services (PES) that provide payments to forest owners for forest preservation are an essential policy tool. Costa Rica's model stands out: funded by an earmarked portion of fuel taxes it covers 40% of all the nation's forests, even if financing needs to be put on a broader footing. Other countries have significantly underfunded PES systems or rely mostly on international mechanisms like REDD+ and Article 6 of the Paris Agreement that provide a global mechanism for protecting the world's remaining forests, but implementation is slow and partly untested. The possibility to sell carbon credits through emissions trading schemes (ETS) can provide

powerful incentives for reforestation. New Zealand's pioneering inclusion of forestry in its ETS, where forest owners can earn carbon credits for capturing carbon through tree growth and must surrender credits if they deforest, provides useful lessons on how such schemes should be designed in forest-rich countries. There should be differentiation according to the emissions removal potential of different forest types, and the design should ensure a sufficiently high carbon price to incentivise carbon-efficiency in non-LULUCF sectors.

The OECD Economic Surveys call for:

- More robust, broader, and sustainably financed payment for ecosystem services schemes and the expansion and integration of emissions trading schemes.
- Better integration of eco-tourism, agroforestry, pisciculture and sustainable timber industry into regional economic development and planning.
- Public incentives that complement, not contradict, private-sector logic.

Conclusion

To truly value forests, governments must embed them into national budgets, tax systems and investment frameworks. Forest conservation must be seen as a sensible investment into preserving the nation's natural wealth and resources. The cost of these investments is often relatively modest but strong leadership and coordination is needed to ensure that institutions and incentives all work in the same direction.

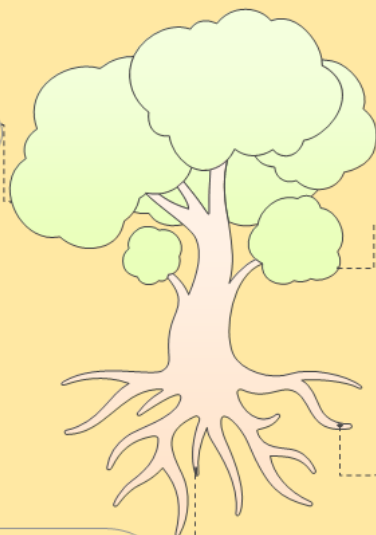
At COP30 in Belem, forest rich countries have a chance to lead, not just in emission reductions, but also in showing how forests can support climate goals and the economy.

Infographic

Key learnings from OECD Economic Surveys on **Controlling Deforestation**

NEW ZEALAND

Carbon credits from the missions trading scheme (ETS) have ushered in an afforestation boom.



INDONESIA

Better control of peat fires helps control emissions.

COSTA RICA

Eliminating distortive subsidies, a high-powered payment for ecosystem services (PES) scheme, and ecotourism has turned forests into carbon sinks.

FINLAND

A tradition of careful forest management and knowledge gained from scientific research underpins forest growth.

REFERENCES

OECD Economic Surveys: Costa Rica 2025, <https://doi.org/10.1787/048cf07b-en>

OECD Economic Surveys: Finland 2025, <https://doi.org/10.1787/985d0555-en>

OECD Economic Surveys: Peru 2025, <https://doi.org/10.1787/76f6eb73-en>

OECD Economic Surveys: Colombia 2024,
<https://doi.org/10.1787/a1a22cd6-en>

OECD Economic Surveys: Indonesia 2024,
<https://doi.org/10.1787/de87555a-en>

OECD Economic Surveys: New Zealand 2024,
<https://doi.org/10.1787/603809f2-en>

OECD Economic Surveys: Brazil 2023,
<https://doi.org/10.1787/a2d6acac-en>

Garcia Soto and Koelle (2025): "Deforestation in Peru: Key facts and main drivers". *OECD Economics Department Working Paper No. 1846*, <https://doi.org/10.1787/e7786877-en>

Generando espacio fiscal para un crecimiento sólido, sostenible y ampliamente compartido en el Perú

Category: Peru, Posts in Spanish, Uncategorized
written by oecdecoscope | February 2, 2026



Por Aida Caldera-Sánchez, Paula Garda y Michael Koelle, OCDE.

Disponible en inglés

El Perú tiene la oportunidad de combinar un mayor crecimiento económico con finanzas públicas sostenibles. Durante las dos últimas décadas, Perú fue una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, apoyada en un robusto marco macroeconómico que incluye reglas fiscales, una política monetaria creíble y una supervisión financiera robusta. Una gestión fiscal prudente permitió elevar los niveles de vida y atraer inversión, y ayudó a afrontar diversos choques externos y domésticos. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado desde el fin del boom de las materias primas, lastrado por la debilidad de la inversión privada y una productividad estancada. Al mismo tiempo, en los últimos años los déficits fiscales han superado las metas de la regla fiscal, con medidas que aumentan el gasto sin un claro financiamiento y otras medidas que erosionan la base tributaria. Si estas tendencias se mantienen, existe el riesgo de debilitar el sólido marco macroeconómico que hasta ahora ha sustentado la resiliencia de la economía peruana.

Como proyecta el recientemente publicado Estudio Económico de la OCDE sobre el Perú, el crecimiento se moderará a 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026, en un contexto de incertidumbre global y doméstica, y tasas de crecimiento cercanas a la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Esto hace que la sostenibilidad fiscal sea aún más urgente, ya que, con un menor crecimiento, estabilizar la deuda se vuelve más difícil. Adicionalmente, las proyecciones de la OCDE muestran déficits fiscales por encima de los límites de la regla fiscal en los próximos años, requiriendo un ajuste adicional de alrededor de 0,4% del PIB. Sin un mayor esfuerzo de movilización de ingresos y un control más estricto del gasto, cumplir las reglas fiscales seguirá siendo un desafío incluso en el mediano plazo.

Por qué importa el espacio fiscal

Para aumentar la capacidad de crecimiento de largo plazo, el Perú necesita espacio fiscal para invertir en educación,

protección social, infraestructura y adaptación al cambio climático. Sin reformas para financiar gasto público ya comprometido, la deuda aumentará de forma sostenida incluso desde un punto de partida bajo (línea roja de la Figura 1). En cambio, una mayor eficiencia en el gasto, una reforma tributaria integral (línea naranja) y una ambiciosa agenda de reformas pro-crecimiento (línea verde) para elevar la productividad, reducir la informalidad y fortalecer las instituciones mantendrían la deuda en una trayectoria sostenible. En conjunto, estas reformas le darían al Perú los medios para acelerar la convergencia de su ingreso per cápita a los países de la OCDE y elevar los niveles de vida.

Cumplimiento de la regla fiscal

La prioridad inmediata es reducir el déficit fiscal para que vuelva a estar dentro de los límites de la regla. Esto es fundamental para mantener la confianza de los inversionistas, conservar bajos los costos de financiamiento y preservar la capacidad del gobierno para responder a choques futuros. Cumplir con la regla fiscal puede lograrse controlando el gasto corriente –en especial la planilla, que tiende a aumentar en años electorales– eliminando gradualmente el subsidio al diésel bajo el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y limitando la proliferación de gastos tributarios. El apoyo financiero a Petroperú, la empresa estatal de petróleo, debe acompañarse de un plan creíble para restaurar su viabilidad, incluyendo la alineación con los estándares de gobernanza de las empresas estatales de la OCDE.

Gastar mejor

Lograr que el gasto e inversión públicos sean más eficientes debe ser una prioridad. El gobierno peruano ya invierte más que muchos países de la OCDE y de la región, pero la calidad de la infraestructura sigue siendo baja, mientras que la cobertura de la protección social es incompleta y mal

focalizada. La tarea es garantizar que cada sol gastado entregue servicios de calidad y llegue a quienes más lo necesitan. Perú puede reorientar recursos hacia protección social, educación y resiliencia climática, al tiempo que fortalece los registros sociales para mejorar la focalización, mejora la evaluación de proyectos de inversión mediante análisis sistemáticos de costo-beneficio y fortalece las capacidades de los gobiernos subnacionales, todo lo cual permitiría mejores resultados.

Aumentar los ingresos

La eficiencia del gasto por sí sola no será suficiente. Con ingresos tributarios de apenas 17% del PIB, el Perú tiene ingresos entre los más bajos de América Latina y muy por debajo del promedio de la OCDE de 34% del PIB (Figura 2). Esto refleja una extendida evasión fiscal, alta informalidad, una administración tributaria ineficiente y una estructura tributaria dependiente del IVA y del impuesto a la renta corporativa, pero debilitada por la baja recaudación del impuesto a la renta personal y gastos tributarios.

Por ello es necesario mejorar la administración tributaria y avanzar en una reforma tributaria integral. Fortalecer la administración tributaria implica modernizar su capacidad para garantizar el cumplimiento. Inversiones en digitalización, facturación electrónica, intercambio de datos entre entidades y auditorías basadas en riesgos harían más eficaz la fiscalización. La reforma tributaria debería incluir varios elementos:

- Revisiones sistemáticas de los gastos tributarios, actualmente estimados en más del 2% del PIB, y cláusulas de caducidad para mantener solo las medidas con beneficios sociales o de productividad claros.
- Simplificación de los regímenes de impuesto a la renta empresarial para las pequeñas empresas mediante la

sustitución de esquemas múltiples y superpuestos por un régimen único que reduzca la evasión e incentive el crecimiento de las empresas y la formalización empresarial.

- Ampliación de la base del impuesto a la renta personal reduciendo gradualmente el umbral a partir del cual se empieza a pagar y reemplazando las contribuciones a la seguridad social basadas en el tamaño de la empresa por contribuciones progresivas basadas en el ingreso laboral, más bajas para quienes ganan menos, para incentivar la formalización laboral.

Junto con una mayor recaudación de impuestos a la propiedad, ambientales y selectivos al consumo, estas medidas crearían un sistema tributario más justo, eficiente y con una base de ingresos más amplia.

El desafío del Perú es reactivar el crecimiento salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal. El cumplimiento de la regla fiscal debe ir de la mano de una mayor eficiencia del gasto, mayores ingresos fiscales y reformas para elevar la productividad y fortalecer las instituciones, sentando las bases de la prosperidad a largo plazo.

Para más información: Panorama económico de la OCDE para el Perú.

Referencia

OCDE (2025), Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025, https://www.oecd.org/es/publications/estudios-economicos-de-la-ocde-peru-2025_626594d0-es.html, Publicaciones OCDE, París.

Building fiscal space for stronger, sustainable and broadly shared growth in Peru

Category: Peru,Uncategorized

written by oecdecoscope | February 2, 2026



By Aida Caldera-Sanchez, Paula Garda and Michael Koelle, OECD.

Available in Spanish

Peru has the opportunity to combine stronger growth with sustainable public finances. Over the past two decades, Peru was among the fastest-growing economies in Latin America, supported by fiscal rules, credible monetary policy, and robust financial supervision. Careful fiscal management boosted living standards, attracted investment, and helped weather repeated shocks. But growth has slowed since the end of the commodity boom, held back by weak private investment and stagnant productivity. At the same time, recent years have seen fiscal deficits exceed the fiscal rule targets, with measures that increase spending without adequate financing, and erosion of the tax base. Unless addressed, these trends risk weakening the strong macroeconomic framework that once underpinned resilience.

As the recently launched OECD Economic Survey of Peru projects, growth will moderate to 2.8% in 2025 and 2.6% in 2026, amid global and domestic uncertainty and close to the economy's current capacity to grow in the long run. This makes fiscal sustainability even more pressing. With weaker growth,

debt is harder to stabilise, and OECD projections show fiscal deficits above rule limits in both years, requiring an additional adjustment of about 0.4% of GDP. Without stronger revenue mobilisation and stricter control of spending, meeting fiscal rules will remain challenging even over the medium term.

Why fiscal space matters

To raise the economy's capacity to grow in the long run, Peru needs fiscal space to invest in education, social protection, infrastructure and climate adaptation. Without reforms to finance already committed spending, debt ratios will rise steadily even from a low starting point (Figure 1, brown line). By contrast, more efficiency in spending, comprehensive tax reform (yellow line), and an ambitious pro-growth reform agenda (green line) to raise productivity, reduce informality, and strengthen institutions would keep debt on a sustainable path. Together, these reforms would give Peru the means to accelerate income convergence and lift living standards.

Complying with the fiscal rule

The immediate priority is to bring the fiscal deficit back within the rule limits. This is critical to retain investor confidence, keep borrowing costs low, and preserve the government's ability to respond to future shocks. Returning to compliance can be achieved by controlling current spending—especially payroll, which tends to rise in electoral years—phasing out the diesel subsidy under the Fuel Price Stabilisation Fund (FEPC) and limiting the proliferation of tax expenditures. Ongoing support to Petroperú, the state-owned oil enterprise, must be paired with a credible plan to restore its viability, including aligning with OECD-standard governance for state-owned enterprises (SOEs).

Spending better

Making public spending and investment more efficient should be

a top priority. Peru's government already invests more than many OECD countries and those in the region, but infrastructure quality remains low, while social protection coverage remains incomplete and poorly targeted. The task is to ensure that every sol spent delivers quality services and reaches those most in need. Reorienting resources towards social protection, education, and climate resilience, while strengthening social registries for better targeting, improving project evaluation using systematic cost-benefit analysis, and building the capacities of subnational governments would improve outcomes.

Raising revenues

Higher spending efficiency alone will not be enough. At just 17% of GDP, Peru's tax revenues are among the lowest in Latin America and far below the OECD average of 34% (Figure 2). This reflects widespread tax evasion, high informality, inefficient tax administration, and a tax structure reliant on VAT and corporate income taxes but weakened by low personal income tax collection and tax expenditures.

Improving the tax administration and advancing a comprehensive tax reform are therefore needed. Strengthening the tax administration means modernising its capacity to ensure tax compliance. Investments in digitalisation, electronic invoicing, data sharing across agencies, and risk-based audits would make oversight more effective. The tax reform should have several elements:

- Systematic reviews of tax expenditures, currently estimated at over 2% of GDP, and sunset clauses to keep only measures with clear social or productivity benefits.
- Simplification of corporate tax regimes for small businesses by replacing multiple overlapping schemes with a single scheme to reduce evasion and encourage

business formalisation.

- Expansion of the personal income tax base by gradually lowering the threshold at which individuals start paying and replace firm-size-based social security contributions with progressive contributions based on labour income, lower for low earners, to encourage labour formalisation.

Together with stronger property, environmental, and excise tax collection, these measures would create a fairer, more efficient tax system and broaden the revenue base.

Peru's challenge is to reignite growth while safeguarding fiscal sustainability. Fiscal rule compliance must go hand in hand with higher spending efficiency, higher revenues, and reforms to raise productivity and strengthen institutions, laying the foundations for long-term prosperity.

For more information: **OECD Economic snapshot for Peru.**

Reference

OECD

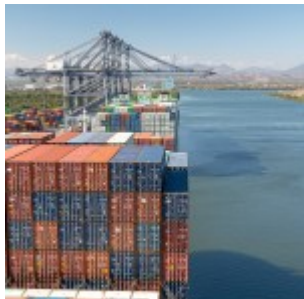
(2025), https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-peru-2025_76f6eb73-en.html, OECD Publishing, Paris.

Convertir la incertidumbre global en oportunidad: Una agenda de competitividad para

América Latina

Category: Argentina,Brazil,chile,Colombia,Costa Rica,Latin America,Mexico,Peru,Posts in Spanish

written by oecdecoscope | February 2, 2026



Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodríguez-Vargas, OCDE.

El contexto global, marcado por una alta incertidumbre política y fragmentación, plantea nuevos desafíos para América Latina, pero también abre nuevas oportunidades para fortalecer su competitividad y reducir vulnerabilidades.

Se espera que el PIB en América Latina crecerá 2.1% en 2025 y 2% en 2026, lo que refleja una desaceleración generalizada en la región. Estas cifras son más bajas que las previstas a fines del año pasado y se sitúan por debajo del promedio de otras economías emergentes. Aunque se espera una fuerte recuperación en Argentina, el crecimiento se mantiene débil en la mayoría de los países, con revisiones a la baja para Brasil, México y Colombia (Tabla), en un contexto generalizado de una débil demanda externa y la alta incertidumbre.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

	2024	2025	2026
PIB variación, %			
 Argentina	-1.7	5.2	4.3
 Brasil	3.4	2.1	1.6
 Chile	2.4	2.4	2.4
 Colombia	1.6	2.5	2.6
 Costa Rica	4.3	3.1	3.1
 México	1.5	0.4	1.1
 Perú	3.3	2.8	2.6
América Latina-7	2.0	2.1	2.0
OCDE	1.8	1.4	1.5
Mundo	3.3	2.9	2.9

	2024	2025	2026
Inflación general, %			
 Argentina	219.9	36.6	14.9
 Brasil	4.4	5.7	5.0
 Chile	4.3	4.5	3.3
 Colombia	6.6	4.7	4.0
 Costa Rica	-0.4	1.8	2.5
 México	4.7	3.4	3.2
 Perú	2.4	1.8	2.1
América Latina 6 (sin Argentina)	3.7	3.7	3.3
OCDE	5.2	4.2	3.2

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.

Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 117, junio de 2025.

La desinflación avanza, pero persisten las presiones inflacionarias. La inflación se mantiene por encima del objetivo en muchos países. En cambio, Argentina ha logrado avances significativos gracias a una combinación de consolidación fiscal y una política monetaria más restrictiva. Con la excepción de Argentina y Brasil, los bancos centrales de la región deberían continuar con su flexibilización monetaria prudente y gradual para asegurarse que la inflación se acerque al objetivo, manteniéndose alerta ante riesgos de salidas de capitales y nuevas presiones inflacionarias.

Los riesgos para las perspectivas son a la baja. Un aumento de los aranceles comerciales y menor dinamismo al previsto en socios comerciales clave podría debilitar aún más las exportaciones y presionar a la baja los precios de las materias primas. Los costos comerciales podrían ralentizar más de lo esperado la desinflación en las economías avanzadas y prolongar tasas de interés globales más altas. Una elevada deuda pública y unas condiciones financieras globales más

restrictivas de lo previsto, podrían retrasar la tan necesaria inversión. Si se intensifican las salidas de capital, los bancos centrales podrían tener menos margen de maniobra para flexibilizar la política monetaria.

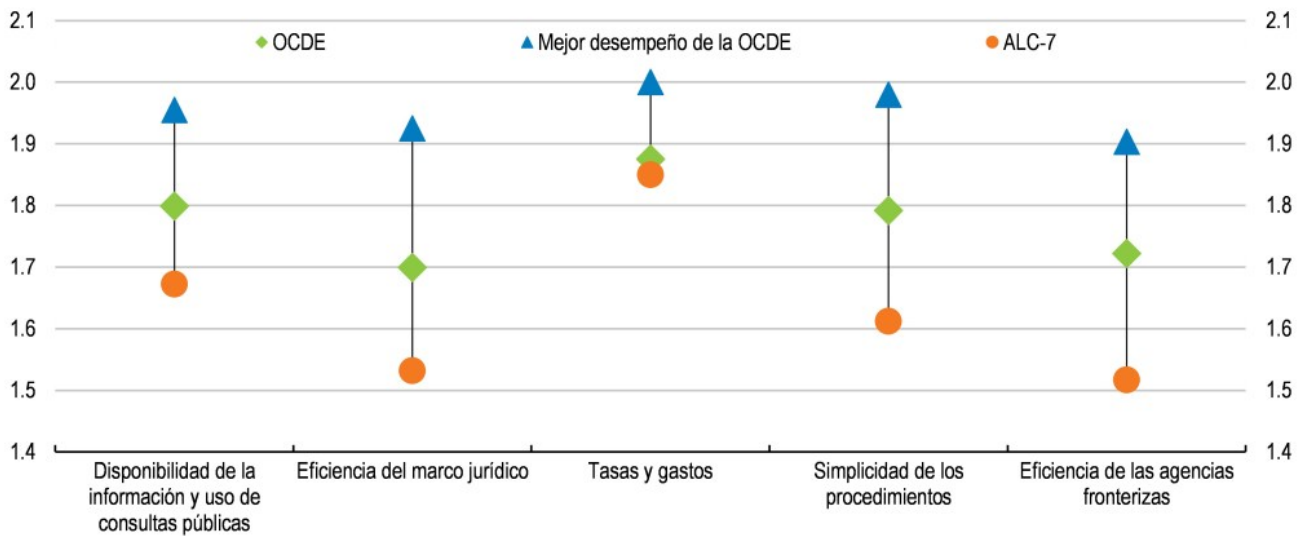
Una agenda de competitividad para tiempos inciertos

En este complejo entorno global, la región necesita más que nunca mejorar sus políticas domésticas. Un área donde es posible avanzar, y urgentemente necesario, es en competitividad, comercio e inversión. Estas no son prioridades nuevas, pero los cambios globales en el comercio, las cadenas de suministro y la transición hacia economías más sostenibles aumentan su relevancia estratégica. Los países que ofrezcan estabilidad institucional, apertura y baja carga administrativa estarán mejor posicionados para atraer inversión y expandir sus mercados.

Mejorar los procedimientos aduaneros representa una oportunidad clara. Según los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE, América Latina aún enfrenta altos costos comerciales debido a procedimientos aduaneros complejos, inspecciones redundantes y poca coordinación entre agencias fronterizas (Figura). Hay amplio margen para mejorar el procesamiento, levante y despacho de mercancías, en particular mediante una mayor automatización y una mejor coordinación entre las agencias aduaneras, sanitarias, tributarias y otras agencias fronterizas. Medidas prácticas como la cooperación entre agencias de distintos países en la frontera, la agilización de los procesos judiciales y una mayor digitalización pueden beneficiar a los exportadores, especialmente a las pequeñas empresas, y atraer inversión. Además, estas medidas reducen los costos de operar formalmente, lo que incentiva a más empresas a salir de la informalidad.

Figura. Las políticas de facilitación del comercio pueden mejorarse en América Latina

2 = Mejor desempeño



Nota: Disponibilidad de la información y uso de consultas públicas es la media de los indicadores de la facilitación del comercio (TFI, por sus siglas en inglés) A y B. Eficiencia del marco jurídico es la media de los indicadores TFI C y D. Simplicidad de los procedimientos es la media de los indicadores TFI F, G y H. Eficacia de las agencias fronterizas es la media de los indicadores TFI I, J y K. ALC-7 es la media de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

Fuente: Estadísticas sobre los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE (TFI, por sus siglas en inglés).

La facilitación del comercio debe ir acompañada de reformas más amplias que fomenten la productividad. Impulsar la competitividad de las exportaciones y la productividad empresarial también requiere un entorno empresarial más dinámico, una mayor competencia doméstica, un mejor acceso a la financiación, más capacitación y capacidad de innovación. Estas reformas se refuerzan mutuamente: las empresas más productivas tienen mayor probabilidad de exportar, invertir y formalizarse.

El fortalecimiento de la integración regional sigue siendo relevante en América Latina, especialmente en un mundo donde las cadenas de valor están cambiando y los centros regionales

cobran mayor importancia. El enfoque debe centrarse en la cooperación: mejorar la cooperación entre organismos fronterizos, el reconocimiento mutuo de normas, el intercambio de datos, los sistemas interoperables y el reconocimiento de estándares técnicos comunes. La región también cuenta con un potencial sin explotar en el comercio de servicios, gracias a idiomas compartidos y husos horarios similares; sin embargo, el comercio interregional de servicios sigue siendo bajo en comparación con los estándares mundiales.

América Latina debe adoptar una visión más orientada hacia el exterior. Acuerdos comerciales como el de la UE-Mercosur, y la participación en marcos plurilaterales como la Alianza del Pacífico o el CPTPP pueden ayudar a diversificar mercados de exportación, atraer inversión, fortalecer la participación en las cadenas globales de valor y aprovechar nuevas tecnologías. Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de estas iniciativas, los países deben mejorar su capacidad de implementación y garantizar la coherencia entre las políticas comerciales, de inversión y regulatorias.

América Latina cuenta con ventajas reales: vastas reservas de minerales críticos, abundante energía renovable, una fuerza laboral joven y cada vez más cualificada, y proximidad a mercados clave. Al impulsar reformas concretas que mejoren la competitividad, reduzcan las barreras comerciales y atraigan inversión de calidad, la región puede convertir los desafíos actuales en oportunidades y sentar las bases para un crecimiento más sólido y resiliente.

Referencias:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 1, OECD Publishing, Paris, doi – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América

Latina, Junio 2025.

Información detallada por
país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa
Rica | México | Perú

Pathways to Prosperity: Key Reforms for a Thriving Peru

Category: Latin America, Peru, Tax
written by oecdecoscope | February 2, 2026



También disponible en español

By **Paula Garda** and **Michael Koelle**, OECD Economics Department

Peru has made significant strides over the past two decades in reducing poverty and improving living standards, outperforming many Latin American peer countries as highlighted in the 2023 Economic Survey of Peru. The basis for this progress was the country's robust macroeconomic framework and ambitious structural reforms implemented in 1990s. These reforms have catalysed macroeconomic stability, high economic growth, low inflation and low public debt.

The COVID-19 pandemic, however, exposed remaining challenges. Peru experienced one of the most severe economic contractions and excess mortality rates of any country. The economy bounced

back in 2021, thanks to its fiscal buffers. The recovery was short-lived and a series of shocks, including Russia's war of aggression in Ukraine, social unrest and extreme weather events led to inflationary pressures and economic slowdown. The economy is projected to gradually recover with inflation returning to the target range by early 2024. However, Peru faces long-standing structural issues like a large informal sector, infrastructure gaps, and a weak rule of law. These not only magnify the impact of adverse shocks and socio-economic inequalities but also hold up Peru on its path towards better standards of living.

As Peru embarks on its journey towards OECD accession, the process represents a transformative opportunity for the country to design and implement a comprehensive reform agenda to foster convergence to higher living standards for all Peruvians. The 2023 Peru Economic Survey highlights four key priority areas of reforms:

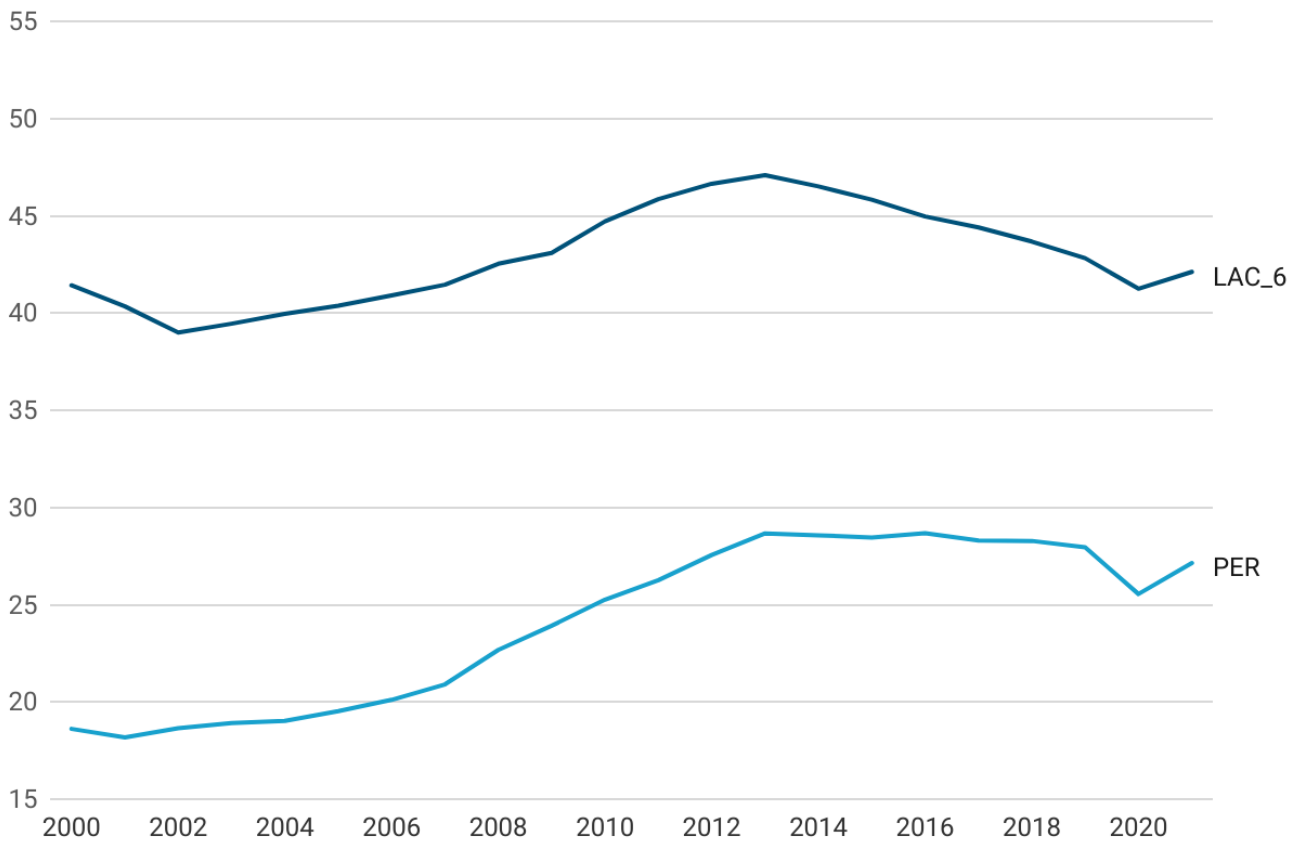
Fostering Long-Term Growth

Income convergence to more advanced countries stalled in 2014 with the end of the commodity price boom, making it of utmost importance to boost productivity and investment. While commodities, particularly minerals, have fuelled past growth, there is a need to expand the economy's productive base. High concentration of market power in a few major business groups reduces market dynamism. This calls for strengthening competition enforcement and simplifying regulations to boost productivity. Additionally, better public spending efficiency would help close infrastructure gaps and deliver essential services while boosting potential growth. This entails enhancing local government capabilities, improving infrastructure planning, and modernising the civil service to enhance overall state capacity. Strengthening the rule of law by fighting corruption and improving judicial independence and efficiency is equally important, as it not only encourages

investment but also restores trust in institutions.

Convergence has slowed down

GDP per capita % average OECD



USD, 2017 PPPs. LAC_6 is the simple average of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica and Mexico.

Chart: OECD • Source: WDI, World Bank • Created with Datawrapper

Tackling Informality

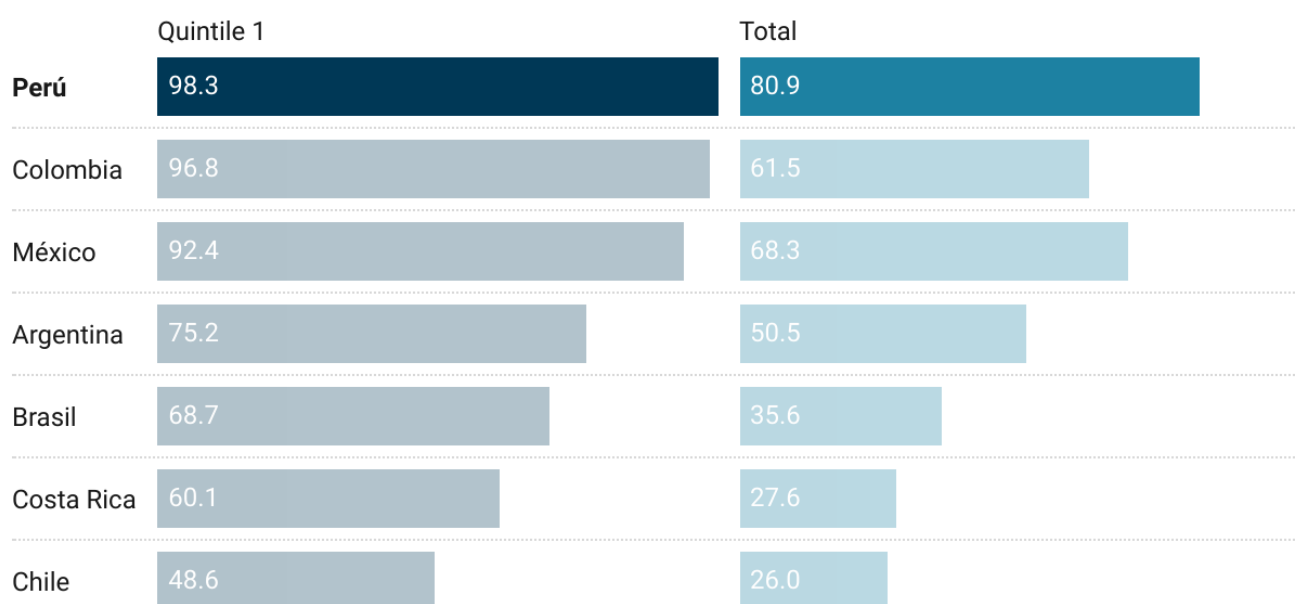
The challenge of informality looms large in Peru, with around 80% of workers in informal jobs, without social and labour protection, and on the margin of the formal tax and benefit system. Though there is no silver bullet solution as the roots of informality are multi-dimensional, fostering formality through a comprehensive reform package is essential for reducing poverty and inequality, boosting productivity, and improving tax collection. Ensuring universal access to basic social benefits – health, pensions, and social assistance – for both formal and informal sector workers alike, could remove some distortions that incentivise informality. This

requires increased social spending funded by general taxation instead of by social contributions that make formal job creation expensive incentivising informal job creation. Providing universal access to pensions and health services financed by general taxation offers the possibility of reducing social contributions for low-income workers, promoting formal employment, and boosting productivity. Improving access to high-quality education tackles another root cause of informality, low labour productivity. Closing the gap in learning outcomes, especially among disadvantaged students, requires improving teachers' training and addressing school infrastructure gaps.

Informality is widespread

% employment

■ Quintile 1 ■ Total



Informal workers are those not contributing to the pension system.

Chart: OECD • Source: SIMS database, IADB • Created with Datawrapper

Strengthening Public Finances

Peru's current tax revenues, at 17% of GDP, lag both OECD and regional peers. A key challenge for Peru is sustaining fiscal responsibility while addressing social and infrastructure needs. Addressing this gap requires a multifaceted approach:

improving spending efficiency while strengthening tax administration, reducing tax expenditures, modernizing property registries, and streamlining corporate tax schemes.

Confronting Climate Change

Climate change poses another significant challenge for Peru. The country is highly vulnerable to extreme weather events and is committed to achieving carbon neutrality by 2050. To achieve this goal, the country must combat deforestation—a major contributor to greenhouse gas emissions—and accelerate the use of renewable energy sources implementing stricter regulations and consistent price signals to reduce reliance on fossil fuels, tapping the enormous potential that the country has in this area.

As Peru navigates these multifaceted challenges, its process of accession to the OECD can offer a framework for long-term reforms that address existing vulnerabilities and allow the convergence to higher living standards. This roadmap, grounded in evidence and best practices, should build on the successes of the past, such as the robust macroeconomic setup that fuelled Peru's economic growth. Realising this transformation demands political consensus, evidence-backed policies, and collaborative efforts.

References



OECD Economic Surveys PERU

SEPTEMBER 2023



OECD (2023), *OECD Economic Surveys: Peru 2023*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/081e0906-en>

Avanzando juntos: Reformas claves para un Perú próspero

Category: Peru, Tax

written by oecdecoscope | February 2, 2026



Also available in English

Por **Paula Garda** y **Michael Koelle**, Departamento de Economía de la OCDE

Perú ha logrado significativos avances en las últimas dos décadas hasta 2019 en la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida, superando a muchos países de América Latina, como se destaca en el Estudio Económico de la OCDE de Perú 2023. La base de este progreso fue un sólido marco macroeconómico y ambiciosas reformas estructurales implementadas en la década de 1990. Estas reformas han logrado darle al país estabilidad macroeconómica, alto crecimiento económico, baja inflación y una de las menores ratios de deuda pública- PIB en la región.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto los desafíos estructurales pendientes. Perú experimentó una de las contracciones económicas y tasas de mortalidad más altas de todos los países. La economía se recuperó en 2021, gracias a los existentes amortiguadores fiscales. Pero la recuperación fue transitoria y una serie de shocks, como la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, conflictos sociales y el fenómeno del Niño, provocaron presiones inflacionistas y una ralentización económica. Se prevé que la economía se recupere

gradualmente y que la inflación vuelva al rango objetivo a principios de 2024. Sin embargo, Perú se enfrenta a problemas estructurales de larga data, como una alta proporción de empleos informales, amplias brechas en infraestructuras básicas y un débil Estado de Derecho. Estos problemas no sólo magnifican el impacto de *shocks* adversos y las desigualdades socioeconómicas, sino que también frenan a Perú en su camino hacia mejores niveles de vida.

A medida que el Perú se embarca en su viaje hacia la adhesión a la OCDE, el proceso representa una oportunidad transformadora para que el país diseñe e implemente una agenda integral de reformas para fomentar la convergencia hacia mejores niveles de vida para todos los peruanos. El Estudio Económico del Perú 2023 destaca cuatro áreas prioritarias de reformas:

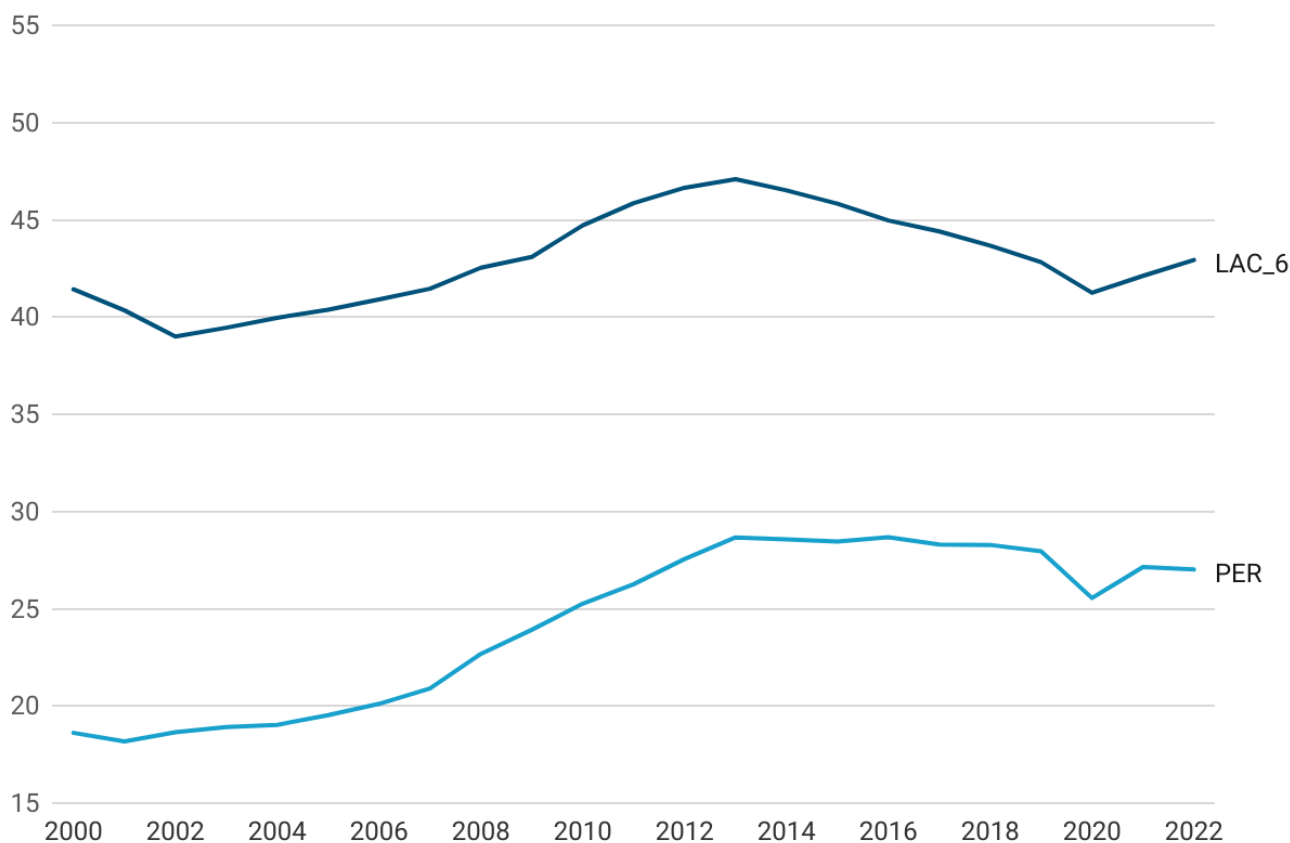
Fomentar el crecimiento de largo plazo

La convergencia de ingresos hacia los países más avanzados se estancó en 2014 con el fin del auge de los precios de las materias primas, por lo que es de suma importancia impulsar la productividad y la inversión. Aunque las materias primas, en particular los minerales, han impulsado el crecimiento en el pasado, es necesario ampliar la base productiva de la economía. La elevada concentración del poder de mercado en unos pocos grandes grupos empresariales reduce el dinamismo del mercado. Esto exige reforzar la aplicación de las leyes de competencia y simplificar las regulaciones y licencias para impulsar la productividad. Además, una mayor eficiencia del gasto público ayudaría a cerrar las brechas en infraestructuras y a prestar servicios públicos esenciales, impulsando al mismo tiempo el crecimiento potencial. Ello implica reforzar las capacidades de los gobiernos subnacionales, mejorar la planificación de las infraestructuras y modernizar el servicio civil para aumentar la capacidad de implementación del Estado. El fortalecimiento

del Estado de Derecho mediante la lucha contra la corrupción y la mejora de la independencia y la eficiencia del sistema judicial es igualmente importante, ya que no sólo fomenta la inversión, sino que también puede restablecer la confianza en las instituciones.

La convergencia de ingresos se ha ralentizado

PIB per cápita como % del promedio de la OCDE



USD, PPA de 2017. LAC_6 es la media simple de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

Chart: OCDE • Source: WDI, Banco Mundial • Created with Datawrapper

Luchar contra la informalidad

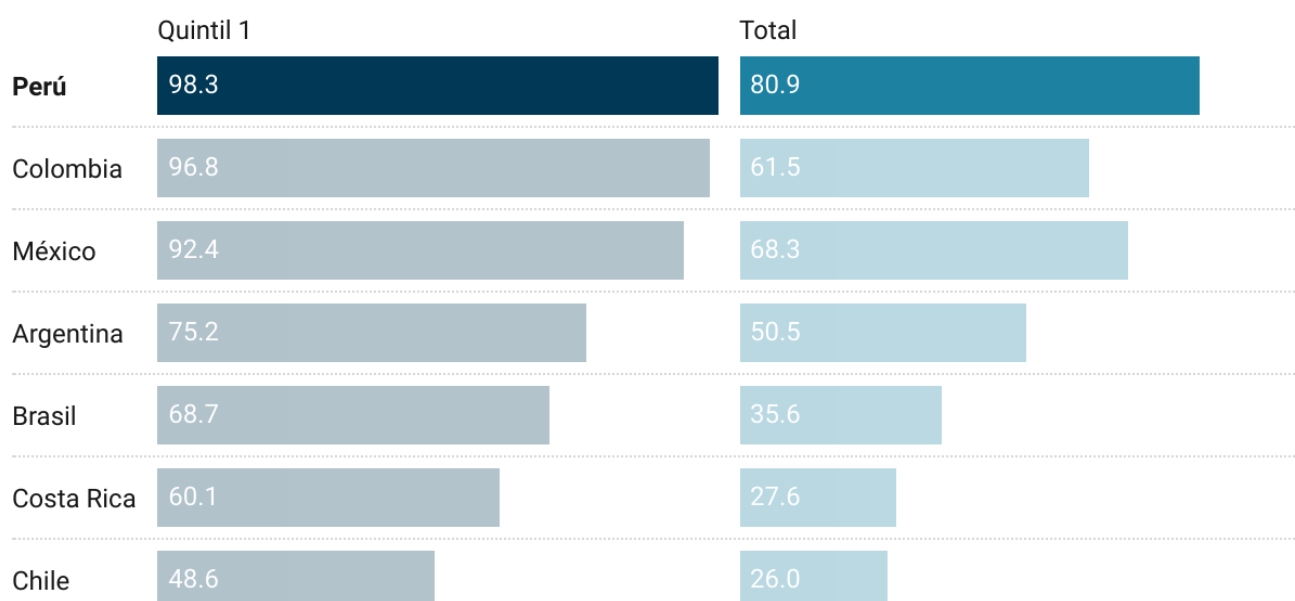
La informalidad representa un gran desafío para Perú, con cerca del 80% de los trabajadores en empleos informales, sin protección social o laboral, y al margen del sistema formal de impuestos y transferencias. Aunque no existe una solución milagrosa, ya que las raíces de la informalidad son multidimensionales, fomentar la formalidad a través de un paquete integral de reformas es esencial para reducir la

pobreza y las desigualdades, impulsar la productividad y mejorar la recaudación tributaria. Garantizar un acceso universal a unos servicios básicos de protección social – en salud, pensiones y asistencia social – tanto para los trabajadores formales como informales, podría eliminar algunas distorsiones que incentivan la informalidad. Para ello es necesario aumentar el gasto social financiado con impuestos generales en lugar de con contribuciones sociales que encarecen la creación de empleo formal incentivando así la creación de empleo informal. Proporcionar un acceso universal a las pensiones y a los servicios de salud financiados por impuestos generales ofrece la posibilidad de reducir las contribuciones sociales de los trabajadores de bajos ingresos, promoviendo el empleo formal e impulsando la productividad. Mejorar el acceso a una educación de alta calidad aborda otra de las causas fundamentales de la informalidad, la baja productividad laboral. Cerrar la brecha en los resultados de aprendizaje, especialmente entre los estudiantes desfavorecidos, requiere mejorar la formación de los maestros y abordar las deficiencias de las infraestructuras escolares.

La informalidad del empleo es generalizada

% de empleo

■ Quintil 1 ■ Total



Los trabajadores informales son aquellos que no cotizan al sistema de pensiones.

Chart: OCDE • Source: Base de datos SIMS, BID • Created with Datawrapper

Fortalecer las finanzas públicas

Los ingresos tributarios del Perú, del 17% del PIB, son inferiores a los de sus pares de la OCDE y de la región. Un reto clave para Perú es mantener la responsabilidad fiscal al tiempo que se abordan las necesidades sociales y de infraestructura. Enfrentar este desafío requiere un enfoque multidimensional: mejorar la eficiencia del gasto público al tiempo que se refuerza la administración tributaria, se reducen los gastos tributarios, se moderniza el catastro y se racionalizan y simplifican los regímenes del impuesto a la renta de sociedades.

Afrontar el cambio climático

El cambio climático plantea otro desafío importante para Perú. El país es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Para lograr este objetivo, el país debe

combatir la deforestación -un importante contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero- y acelerar el uso de fuentes de energía renovables aplicando regulaciones más estrictas y señales de precios coherentes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aprovechando el enorme potencial que el país tiene en energías renovables.

Mientras Perú navega por estos desafíos multidimensionales, el proceso de adhesión a la OCDE puede ofrecer un marco para reformas que aborden las vulnerabilidades existentes y permitan la convergencia hacia niveles de vida más altos para todos los peruanos. Esta hoja de ruta, basada en evidencia y buenas prácticas, debería aprovechar lo que ha funcionado bien, como el sólido marco macroeconómico que ha impulsado el crecimiento económico de Perú. Llevar a cabo esta transformación exige consenso político, políticas basadas en evidencia y esfuerzos de todos los peruanos.

Referencias



OECD Economic Surveys PERU

SEPTEMBER 2023



OECD (2023), *OECD Economic Surveys: Peru 2023*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/081e0906-en>